



Palabras de María Elena Morera, Presidenta de **Causa en Común**, en el Séptimo Foro Nacional “Sumemos Causas”

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2019.

Buenos días a todas y todos.

Doy la bienvenida a Virginia Kent, Directora Interina de la Oficina de Iniciativa Mérida, a quien agradezco el apoyo al programa “Construyendo Seguridad Ciudadana” que lleva a cabo nuestra organización desde hace 5 años.

A nuestro amigo Luis Raúl González Pérez, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Te agradecemos el apoyo de la Comisión a los programas de Causa en Común.

Bienvenidas las compañeras y compañeros de las organizaciones de la sociedad civil, académicos, miembros de los cuerpos de policía, a los representantes de medios de comunicación.

A todas y todos nuestros distinguidos invitados les damos nuestro agradecimiento por su participación en este “Séptimo Foro Nacional - Sumemos Causas”. Es nuestra intención que este espacio sirva para reflexionar juntos sobre los muy difíciles momentos por los que pasa nuestro país, no sólo en términos de la inseguridad que padecemos, sino también en la responsabilidad que todos tenemos de buscar que los equilibrios democráticos se preserven y no se trastoquen derechos, garantías y libertades.

En nuestro Foro Nacional de 2017, señalamos que la crisis de inseguridad era una realidad que iba, de gravísima a peor; que era padecida por millones de mexicanos; y



que diariamente la podíamos constatar con eventos que lastimaban irremediablemente a familias y a comunidades.

Por cierto, en aquel entonces el Ejecutivo también criticó el trabajo de la sociedad civil, porque, a su juicio, hacíamos “bullying” a las instituciones y no reconocíamos sus avances.

Pero más allá de la anécdota habría que preguntarse ¿Qué ha cambiado desde entonces? Los datos son muy claros: seguimos con la misma tendencia, y las cosas, lejos de mejorar, continúan en un proceso de deterioro. Hace justo seis meses el ejecutivo dijo que, por estas fechas la violencia iba a comenzar a disminuir, compromiso que no se ha cristalizado. Por ejemplo, en los primeros nueve meses del 2019, hasta septiembre pasado, se acumularon al menos 26,638 homicidios dolosos. También en el año continúan incrementándose los feminicidios, los secuestros y las extorsiones.

Lo dijimos hace dos años, lo reiteramos ahora, tenemos números y eventos propios de una guerra. Ante esto debemos preguntarnos: ¿Qué estamos haciendo para fortalecer nuestro Sistema de Seguridad y Justicia?, ¿Qué estamos haciendo para acompañar a las víctimas?

Cuando uno plantea estas preguntas, la preocupación no se reduce, sino que aumenta. Por que en la Estrategia Nacional de Seguridad no observamos diagnósticos, procesos, mecanismos u objetivos verificables que puedan hacer frente al enorme problema de inseguridad.

Lamentablemente, tampoco somos optimistas en cuanto al rumbo que se ha tomado en los hechos, el cual ha sido definido por cinco elementos:



1. La desaparición muy precipitada de la Policía Federal, para dar paso a la creación de una Guardia Nacional militarizada.
2. El abandono de las policías locales,
3. La ausencia de un proyecto de reforma ministerial.
4. La falta de un plan penitenciario, y
5. La gravísima omisión de no contemplar una auténtica política de prevención.

Además, pensamos que es un camino equivocado continuar incrementando la carga de responsabilidad sobre nuestras Fuerzas Armadas, ahora con atribuciones constitucionales en seguridad pública, y con la responsabilidad de construir la Guardia a partir de sus propios elementos y recursos. Y debemos estar claros, no habrá Guardia Nacional que alcance si no se apoya en el trabajo de policías locales bien preparadas.

Debo subrayar que, a pesar de nuestras muy serias reservas en cuanto al rumbo general que se ha tomando, continuaremos apoyando en todo lo que podamos para que la Guardia Nacional evolucione como la institución civil que se acordó políticamente y que se plasmó en las reformas respectivas.

Continuaremos insistiendo en la ineludible e inaplazable reforma policial que requiere el país. En este sentido, hace apenas unos días, Causa en Común entregó al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, unos lineamientos muy puntuales que buscan complementar y fortalecer el modelo de desarrollo policial que se está promoviendo.



Queremos ser muy enfáticos en nuestro respaldo a nuestros policías, a nuestros soldados y marinos. Los asesinatos y las agresiones que se acumulan en su contra con total impunidad son un agravio a todos los mexicanos y una afrenta al Estado. Todos ellos requieren y merecen capacitación, equipamiento, instalaciones adecuadas, sueldos dignos y prestaciones a la altura de los riesgos que enfrentan por todos nosotros. Pero ante todo, requieren una clara definición por parte de nuestras autoridades de los tres ámbitos de gobierno de que los respaldan frente a los criminales. Hacer uso de la fuerza legítima del Estado no es caer en una “tentación”, como equivocadamente se interpreta en estos días. Es una responsabilidad que debe ser respaldada por todos, empezando desde luego, por los encargados políticos de nuestra seguridad. Lo sucedido en Culiacán coloca esta preocupación en el centro de cualquier discusión sobre seguridad, e incluso sobre el tipo de país que queremos. Ciertamente, lo sucedido sienta un precedente muy ominoso en cuanto a la responsabilidad del gobierno federal de salvaguardar nuestra seguridad y el Estado de derecho en el país.

Igualmente, debemos ser muy enfáticos en nuestra defensa de libertades y derechos. No compartimos la contrarreforma que amplió el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Irán a prisión, primero, las personas que no cuenten con el debido apoyo legal; es decir, los más pobres. Y luego, quizá, aquellos que no se encuentren en los mejores términos con gobierno. Es el mismo sentido de las contrarreformas en materia de extinción de dominio o la que equipara presuntos delitos fiscales con delincuencia organizada.

No tenemos entonces claro qué rumbo es el que se nos propone. Por un lado, la militarización sin desarrollo policial; por otro, instrucciones de no enfrentar a la criminalidad. Por un lado, más prisión automática; por otro, liberación de jefes del



crimen organizado. Da la impresión de que lo que vemos es una serie de ocurrencias que al final deriva en márgenes muy amplios de discrecionalidad, cuando lo que le urge al país es certidumbre, y definiciones y reglas claras, acordes con nuestras leyes.

A todo lo anterior se suma, o se restan retrocesos en áreas clave de nuestro sistema democrático y de defensa de derechos humanos, llámense órganos autónomos, o diversas instituciones o programas sociales que han desaparecido o se encuentran bajo acecho constante. Tampoco podemos pasar por alto las advertencias, casi amenazas, a medios de comunicación y a periodistas.

Por todo esto, terminaremos el Foro con un diálogo en torno a los retos que enfrentan las organizaciones de la sociedad civil en las actuales circunstancias. Adelanto que en Causa en Común no hemos sido espectadores ni pensamos serlo. Continuaremos ejerciendo el derecho a la crítica constructiva, acompañada de propuestas.

El país es de todos y de todos es la responsabilidad de participar y apoyar en la construcción de un mejor futuro. Un futuro con instituciones que defiendan nuestra paz y tranquilidad, que atiendan y protejan a las víctimas, que salvaguarden nuestros derechos y libertades.

Amigas y Amigos:

Como hemos dicho desde hace ya mucho tiempo, México va tarde, para actuar con la contundencia que requiere la emergencia de seguridad que nos abruma. Quiero aprovechar este espacio para enviar un exhorto respetuoso pero enérgico al gobierno federal: deben asumir, de una vez y plenamente, sus responsabilidades frente a la violencia y al crimen organizado en el país. De hacerlo, estoy segura que contará con



todo el apoyo de las organizaciones sociales, y de todas las mexicanas y mexicanos de bien.

Cumplir con esas responsabilidades no está reñido con el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos. Al contrario, las acciones necesarias en materia de seguridad deben realizarse dentro de nuestro marco legal, y con el cometido de que podamos ejercer nuestros derechos y libertades.

Como siempre, el diálogo es indispensable y debe ser permanente. La pluralidad no es un motivo para polarizar o para restar; al contrario: es una oportunidad para fortalecernos con un sentido esencial de solidaridad....

Deseo en verdad que podamos tener todos, una mañana muy provechosa con este ánimo y con esta esperanza.

Muchas gracias.